



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

R

A

**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**



CLACSO

**Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais**

Documento de trabajo N° 228

***Realizado por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de R***



Integrantes Juan

Diarios E

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos **Comités de Seguimiento del Conflicto Social** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS	INSTITUCION	RESPONSABLES
Guatemala	FLACSO	Simona Yagenova Mario Castañeda
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Diana Cárdenas
Paraguay	Centro de Documentación de Estudios	Quintín Riquelme
Ecuador	CIUDAD	Mario Unda Hugo González
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Chile	ARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo
Brasil	LPP	Roberto Leher
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
México	UNAM	Massimo Modonesi Lucio Oliver
Panamá, El Salvador, Nicaragua Honduras y Costa Rica	CELA (Panamá)	Marco A. Gandásegui, h.
República Dominicana y Puerto Rico	Centro Juan Montalvo (Rep. Dominicana)	Mario Serrano Juan Luis Corporán
Venezuela	PROVEA	Marino Alvarado Marco Antonio Ponce
Costa Rica	IIS	Sindy Mora Solano

Costa Rica

Cronología del conflicto social

Setiembre de 2009

Martes 1

Representantes de los 24 grupos indígenas del país se concentran frente a la Asamblea Legislativa, para solicitar a las y los diputados que aprueben el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. A pesar de que los líderes y representantes indígenas son atendidos por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Méndez, amenazan con cortar rutas en las carreteras de la provincia de Limón. Los indígenas lanzan dicha amenaza, dado que todas las fracciones legislativas prometen el apoyo para la aprobación del proyecto, y sin embargo, ninguna de ellas lo aprueba.

El diputado del Partido Frente Amplio (FA), José Merino del Río, presenta un recurso de amparo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), dado que desde hace 3 meses esta institución ha dejado de realizar los exámenes que determinan la afectación o no de los ex trabajadores bananeros afectados por el nemagón. El pronunciamiento de Merino se hace luego de que un grupo de “afectados”, tal y como se autodenominan, se presentan en las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar el apoyo de las y los diputados. El nemagón fue el químico utilizado hasta los años 80 por las empresas bananeras en Centroamérica, y que dejó miles de afectados por esterilidad, malformaciones y cáncer en los distintos países de la región. Lo que los afectados costarricenses solicitan es una indemnización por parte del Estado.

Un grupo de vecinas y vecinos del cantón de Santa Ana, en la capital San José, realizan una marcha por las principales calles de la capital, para protestar por el cobro del peaje a la altura del cantón de Escazú. De acuerdo con las y los vecinos, el cobro del peaje no debe realizarse hasta tanto la concesionaria española Autopistas del Sol no termine con las obras de construcción de la nueva carretera San José-Caldera. Hasta el momento la única obra que ha hecho la empresa es recarpetear la carretera, mientras que hace falta resolver los problemas de señalización, puentes peatonales, accesos restringidos, entre otros.

Un grupo de transportistas realizan una marcha por las principales calles de la capital San José, como medida de presión para demandarle al Gobierno eliminar el requisito, incluido en la nueva Ley de Tránsito, de portar un nuevo dispositivo con el que se registre toda la información del vehículo, como el peso que lleva, la velocidad a la que se moviliza y los puntos por donde circula. El grupo de transportistas indica que el costo del dispositivo es de cerca de ₡350 mil colones (alrededor de \$595); además se les obliga a estar conectados a un sistema satelital para controlar la información del vehículo, cuyo alquiler cuesta entre \$100 y \$120 por mes.

Miércoles 2

El Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional anuncia la realización de una marcha para este día, como medida de protesta para que las y los diputados de la Asamblea Legislativa aprueben una iniciativa de ley con el fin de que un grupo de 400 trabajadores del sector educativo tengan derecho a una pensión justa. De acuerdo con el Foro, el proyecto consiste en derogar el transitorio I de la Ley 8536, que exige que para obtener la pensión bajo un justo perfil de beneficios, los trabajadores deben aparecer en una lista; sin embargo muchos de ellos, por diferentes circunstancias, no pudieron en su momento realizar dicho trámite.

Jueves 3

El Movimiento por un Estado Laico presenta a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que solicitan se elimine el artículo 75 de la Constitución Política, en el que se afirma que el Estado Confesional de Costa Rica es el católico. El Movimiento está integrado por representantes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, la Universidad Bíblica Latinoamericana, la Iglesia Luterana de Costa Rica, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), el Movimiento Diversidad, la Agenda Política de Mujeres, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares. Este proyecto cuenta con el apoyo de 13 representantes de distintas fracciones legislativas al interior de la Asamblea.

La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitan audiencias públicas para determinar la necesidad o no de la solicitud de aumento en las tarifas eléctricas. Las audiencias son solicitadas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Dicha solicitud se da luego de que CICR rechazara la solicitud de aumento gestionada por el ICE. Los representantes de las organizaciones sociales que demandan audiencias denuncian el carácter excesivamente técnico que adquieren las discusiones, por lo cual la ciudadanía tiene pocos criterios para pronunciarse al respecto.

Transportistas de todo el país se concentran frente a la Asamblea Legislativa para manifestar su oposición al proyecto de Ley de Regulación del Transporte Terrestre Turístico. Los transportistas se oponen al mismo dado que, desde su perspectiva, el proyecto promueve la competencia desleal en el servicio del transporte de turistas.

La UNDECA denuncia la contratación irregular y poco transparente de personal en gerencias, subgerencias y diversas jefaturas intermedias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). De acuerdo a UNDECA, estos nombramientos se han hecho mediante el tráfico de influencias, el amiguismo y la cercanía política, sin que medien criterios técnicos en las contrataciones recientemente realizadas.

Las y los estudiantes y las y los profesores de la Universidad Técnica Nacional (UTN) realizan una declaración pública en la que anuncian que iniciarán protestas en las calles para defender la autonomía universitaria. Este anuncio se da por la supuesta

incorporación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) a la Comisión de Conformación, que es la instancia encargada de llevar adelante el proceso de conformación de la nueva universidad. La principal preocupación es que la UCCAEP tendría potestad de nombrar a dos miembros a esta instancia, por lo que se estaría lesionando la autonomía universitaria, por cuanto la clase empresarial costarricense estaría interviniendo de manera directa en la gestión de esta casa de estudios.

Sábado 5

Alrededor de 150 familias invaden terrenos en Rincón Grande de Pavas, en la provincia de San José, a fin de tener un lugar en el que vivir. Los llamados por el periódico La Nación “precaristas” se instalan en las cercanías del Salón Comunal de Pavas. La prensa informa que los tomadores de tierra destruyen parques de recreación comunal para la construcción de sus viviendas, “destrucción” cuyos costos asciende a los 15 millones de colones. Adicionalmente, la prensa señala que la mayoría de las familias que invaden estos terrenos provienen de lugares como La Carpio y Alajuelita, ambos lugares profundamente estigmatizados por diversos medios de comunicación en el país. Óscar Arias, presidente de la República, asegura que retomarán los espacios públicos ocupados por estas familias.

Lunes 7

Camioneros realizan un bloqueo en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa para protestar contra las reformas que se discuten en el Congreso respecto a la Ley de Tránsito. Adicionalmente, los camioneros solicitan la renuncia de la jefera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Karla González, dado que la implementación de la nueva ley perjudicará al gremio de transportistas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las y los diputados de Asamblea Legislativa de Costa Rica para que apruebe un proyecto de Ley sobre Libertad de Expresión y Prensa. CEJIL hace la solicitud, luego de que un grupo de ex presidentes del Colegio de Periodistas manifestara públicamente su oposición a la eventual aprobación proyecto de ley.

Un grupo de madres y padres de familia de la Escuela Rafael Ángel Calderón Guardia, ubicada en Rincón de Salas Sur en el cantón de Grecia en la provincia de Alajuela, impiden el ingreso de las y los alumnos, las y los maestros y el personal administrativo a la institución, como medida de protesta para que se nombre a una directora para la institución. De acuerdo con las y los manifestantes, desde el pasado mes de agosto, la institución se encuentra sin directora, debido a que el nombramiento de la directora que se encontraba de interina de la institución venció, y ésta fue reubicada en otra escuela.

Las y los trabajadores de la Municipalidad de Curridabat realizan una declaración pública en la que anuncian que irían a huelga como medida de protesta por la no aprobación de la reforma presupuestaria presentada por el Alcalde para el pago de los servicios públicos.

Un grupo de 21 barrenderos de la Municipalidad de San José (MSJ) realizan un paro de labores para protestar por la decisión del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de desalojarlos de las instalaciones en las que se encuentran, ubicadas en el Barrio Otoya, en la capital San José. La decisión se da debido a la intención que tiene el MSP de instalar una comandancia de la Fuerza Pública en el lugar.

Martes 8

Trabajadores de la Municipalidad del cantón de Curridabat, en la provincia de San José, amenazan con un paro de labores, en caso de que la Municipalidad no apruebe la modificación presupuestaria para que el municipio pueda cancelar el pago de servicios públicos. El alcalde y los trabajadores de la Municipalidad solicitan la modificación, dado que dicha entidad adeuda recibos por el servicio de luz, agua y teléfono. El presupuesto solicitado es de ₡11.415.000 colones.

UNDECA anuncia, mediante una declaración pública, un paro de labores para el jueves 10 de setiembre, dado que sus representantes no han recibido respuesta de las autoridades de la CCSS, respecto a su solicitud de revisión de la escala salarial. La solicitud de UNDECA es para que se revisen los salarios de las y los funcionarios no profesionales. De acuerdo a los representantes de UNDECA, desde el mes de marzo la solicitud fue presentada a las autoridades de la Caja, pero los funcionarios de esta institución aún no han emitido ninguna respuesta. La convocatoria se extiende a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y de las clínicas del país.

Miércoles 9

La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) rechaza el recorte de 30 millones de colones que el Ministerio de Hacienda anunció para el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) del próximo año. De acuerdo a la ANDE, el recorte presupuestario significa un retroceso en el reconocimiento de las necesidades del sector público educativo, cuyas fortalezas se vieron considerablemente cuestionadas con la gripe AH1N1, por lo que lejos de reducir el presupuesto, éste debería ampliarse.

La ANEP solicita a la Ministra de Salud, María Luisa Ávila, explicaciones sobre la capacitación que la Unidad Jurídica del Ministerio de Salud (MINSAL) recibió en un hotel de lujo, en Tortuguero, destino turístico en la provincia de Limón. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la ANEP, el costo por dos noches y tres días en dicho hotel es 237 dólares, por lo que solicitan su pronunciamiento respecto a las razones para realizar la capacitación en dicho hotel, así como la fuente de financiamiento de dicha capacitación.

Mediante un comunicado de prensa, UNDECA convoca a un paro de labores a realizarse el jueves 10 de setiembre. La razón de la convocatoria es el reconocimiento de los derechos laborales de las y los empleados no profesionales de los servicios de salud.

El Programa de Protección de Tortugas Marinas (PRETOMA) denuncia que la empresa Agropecuaria Caletas S.A. no ha prestado atención a los llamados que le ha hecho el Tribunal Ambiental para drenar los humedales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Arío. Es por ello que PRETOMA realiza una nueva denuncia, dado que la actividad de la empresa daña el ambiente de las poblaciones de tortuga lora y tortuga baula que anidan en el refugio de vida silvestre.

Jueves 10

Afiliados a UNDECA realizan una marcha y una concentración frente a las instalaciones del MINSA, en la provincia de San José, a fin de solicitar una respuesta respecto a su solicitud de aumento salarial para las y los trabajadores no profesionales. Las y los funcionarios que protestan provienen del Hospital Nacional San Juan de Dios y el Hospital México, ambos hospitales nacionales. También se realizan paros de labores en centros médicos de Pérez Zeledón, en la provincia de San José, en Liberia, de la provincia de Guanacaste y en San Carlos y Grecia en la provincia de Alajuela. Las acciones se dan a pesar de que la ministra de Salud, María Luisa Ávila, emitió una orden sanitaria que prohibía la participación en dicha actividad, debido a la prioridad que tiene la atención de la gripe AH1N1, en las políticas del MINSA.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y quien la preside, el Arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes, hacen un llamado a los feligreses para que no voten en las elecciones de 2010 por los partidos políticos o candidatos que se encuentran a favor de un Estado Laico. En Costa Rica, el Estado es confesional, siendo uno de los pocos países que mantienen esa condición a nivel mundial. La disputa se da luego de que el Movimiento por un Estado Laico presentara a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que solicitan se elimine el artículo de la Constitución Política en la que se afirma que el Estado Confesional de Costa Rica es el católico. Barrantes señala que el Estado y la Iglesia son independientes, más no indiferentes, argumento con el cual rechaza la solicitud del Movimiento por un Estado Laico.

Viernes 11

Con 390 efectivos policiales, funcionarios de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de San José realizan el desalojo de las 150 familias que tomaron los terrenos de Rincón Grande de Pavas el pasado 3 de setiembre. Como resultado del enfrentamiento son detenidas 37 personas, entre ellas 17 menores de edad, de los cuales 12 que quedan en libertad, tras la resolución de la Fiscalía Penal Juvenil de San José. Los encargados policiales del operativo destrozan las 240 viviendas que habían sido constituidas por los tomadores del terreno. Adicionalmente, 15 policías resultan heridos tras el desalojo. En esta nota periodística se indica que los “precaristas” provenían de la León XVIII y Desamparados, barrios del sur del país, también fuertemente estigmatizados a nivel nacional.

La Cámara Nacional de Transportistas (CANATRAC) solicita a la Asamblea Legislativa no se apruebe la Ley de Tránsito hasta que se den las correcciones necesarias al proyecto de ley. Dichas correcciones corresponden a las multas, a la

exigencia de dispositivos de control, así como lo relacionado con el tema de educación vial, para que ésta pueda ser ejercida por otros entes u organizaciones.

Domingo 13

Albino Vargas, de la ANEP, hace público un comunicado en el que anuncia la demanda judicial interpuesta en su contra por la Ministra de Salud, María Luis Ávila. La demanda fue interpuesta por la jerarca por el llamado a paro nacional del 10 de setiembre, a pesar de la situación que vive el país, en el tema de la gripe AH1N1. De acuerdo a Vargas, el miedo y la intimidación de Ávila no surtieron efecto en las y los trabajadores de la Caja que se unieron al paro de labores por la defensa de los derechos de las y los trabajadores no profesionales. Vargas critica la posición de la Ministra, como parte de la estrategia de desprestigio de las organizaciones sindicales del país.

Lunes 14

Un grupo de vecinas y vecinos del cantón de Poás, en la provincia de Alajuela, sostienen una reunión con la Ministra de Seguridad Pública, Janina Del Vecchio, para manifestarle su cansancio por la inseguridad que se vive en el cantón. Entre las demandas de las y los vecinos se encuentra la instalación inmediata de una delegación de Policía en el centro del cantón y la contratación de 25 nuevos policías. La Ministra se compromete a solucionar las necesidades del cantón, contratando 24 nuevos policías y ubicando, en los próximos tres meses, las instalaciones de la Policía en el centro del cantón.

Martes 15

Diversas organizaciones ambientalistas denuncian por imparcial y comprometida empresarialmente la inspección realizada por los Magistrados de la Sala IV en la zona donde se pretende iniciar las actividades de extracción de oro a cielo abierto en Las Crucitas, en la zona norte del país. Esta inspección fue realizada el 11 de setiembre, y contó con la presencia de diversas organizaciones y diputados de diversas fracciones legislativas. En dicha actividad, se permitió que los Magistrados llegaran en automóvil, derecho que fue denegado para los opositores de la minería a cielo abierto, quienes tuvieron que caminar alrededor de 3 km, en una zona sumamente calurosa del país, para presenciar la inspección. Cuando los ambientalistas y opositores llegaron al lugar, la inspección estaba terminando. Por esta razón, abogados ambientalistas ponen recursos de amparo contra la Sala Constitucional, debido a la violación de los procedimientos de inspección judicial. Adicionalmente, las organizaciones ambientalistas solicitan que Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada sean separados de sus cargos como Magistrados.

Miércoles 16

Sindicatos de la CCSS y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Caja sostienen una reunión para darle salida al conflicto por el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores no profesionales. Como producto de la reunión se acuerda sostener 3 sesiones de negociación hasta el 12 de octubre, para encontrar una salida al conflicto. Las autoridades de la Caja se comprometen a no tomar represalias contra las y los trabajadores que participaron en el paro de labores del 10 de setiembre. Los sindicatos por su parte suspenden el llamado a huelga que tenía pendiente realizar para el 21 de setiembre.

Un grupo de transportistas, dueños de busetas de turismo, realizan una caravana por la Autopista General Cañas, para protestar por el impedimento de trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría. De acuerdo con las y los manifestantes, pese a que cuentan con todos los permisos de ley, la Policía de Tránsito y las autoridades aeroportuarias no les permiten recoger a sus clientes en la terminal aérea.

Jueves 17

Organizaciones sociales y sindicales de la provincia de Limón lanzan el “Movimiento de Resistencia Nacional” contra la privatización de los muelles de Limón. Esta provincia del Caribe costarricense ha mantenido una amplia oposición al interés gubernamental de concesionar los puertos del país, lo que desde la perspectiva de las organizaciones sociales no es más que una privatización disfrazada de concesión. Las organizaciones anuncian una serie de acciones de protesta a fin de defender los puertos. Adicionalmente, los sindicatos solicitan la modernización de los puertos por parte del Estado, más no la privatización de los mismos.

La Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) presenta el proyecto de Ley para la gestión integrada del recurso hídrico, con el respaldo de 150 mil firmas, a la Asamblea Legislativa. La Alianza se encuentra formada por el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integrada (PROGRAI), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro de Comunicación Voces Nuestras, la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUNDEU) y la Red Centroamericana de Acción de Agua (FANCA). Estas organizaciones señalan que el marco legal que tiene el país para proteger el agua es obsoleto, por lo que solicitan que se apruebe el proyecto, el cual fue presentado bajo la figura de “iniciativa popular”, a la Asamblea.

Las y los trabajadores de los departamentos de Distribución de Recibos, Lectura de Hidrómetros y Revisiones Domiciliarias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aproximadamente 170 funcionarios, anuncian la realización de un paro de labores, como medida de protesta por la intención del Presidente Ejecutivo, Ricardo Sancho, de trasladar el servicio de entrega de recibos a manos de Correos de Costa Rica. De acuerdo con las y los manifestantes, así lo expresó el Presidente Ejecutivo en una entrevista que le realizó el noticiero ExtraTV42, en la que reconoció la intención de que Correos de Costa Rica se haga cargo de este servicio a partir del año 2010.

Viernes 18

Mediante un comunicado de prensa, la Iglesia Luterana expresa su preocupación por los matices que han venido adquiriendo las discusiones en torno al proyecto de ley de un Estado Laico. De acuerdo a Melvin Jiménez, representante de la Iglesia Luterana, “Dios debe habitar en nuestro corazón, no en nuestra Constitución”, por lo que el Estado no debe ser Confesional, ni el juramento político debe hacerse en nombre de Dios.

Lunes 21

Mediante una carta pública, 8 ex presidentes del Colegio de Periodistas de Costa Rica manifiestan su oposición al proyecto de ley de Libertad de Expresión que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. Los firmantes se oponen al proyecto dado que el mismo introduce modificaciones al Código Penal por los delitos contra el honor, lo que obligaría a un ciudadano afectado a mostrar que el periodista actuó con “desprecio de la verdad”. Adicionalmente, el proyecto busca introducir el principio de “la reproducción fiel”, mediante el cual se podría reproducir cualquier información, eximiendo de responsabilidad a los periodistas y sus empresas por dicha reproducción. Y finalmente, con el proyecto de ley se pretende derogar el artículo 149 del Código Penal, que actualmente permite probar la verdad de lo publicado.

Miércoles 23

Un grupo de vecinos de Rincón Grande de Pavas, en la provincia de San José, denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el uso político de sus necesidades, por parte de la candidata presidencial por el PLN, Laura Chinchilla. Representantes de la comunidad señalan que ellos han realizado un trabajo de aproximadamente 11 meses con representantes gubernamentales para solucionar su problema de vivienda y buscar el aprovechamiento de los terrenos disponibles en la zona. Sin embargo, el proyecto, que inicialmente fue gestionado por la Asociación de Desarrollo Integral de Finca San Juan, fue entregado al delegado presidencial Manuel Antonio Salinas, quien es el delegado presidencial en Pavas, y que se encuentra vinculado a la candidata Laura Chinchilla. Por ello, los representantes comunales solicitan el cumplimiento de las promesas y el respeto de los acuerdos alcanzados anteriormente. La denuncia es hecha con el apoyo de personeros del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Viernes 25

Un grupo de madres y padres de familia de la Escuela del Cocal de Siquirres, en la provincia de Limón, realiza una protesta para exigir el traslado del director de la institución por supuestas agresiones en contra de las y los alumnos.

Lunes 28

Los representantes del autodenominado “grupo mediador” a favor de la concesión de los puertos de Moín y Limón, en la provincia de Limón, realizan una declaración pública en la que anuncian la entrega de un nuevo pliego de 560 firmas a los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), para que se realice una asamblea extraordinaria en la que se decida mediante una votación secreta si se acepta o no la propuesta del Gobierno. De acuerdo, con los representantes del "grupo mediador", de no prosperar la iniciativa, acudirían al MTSS para poder realizar la asamblea.

El grupo Feministas en Resistencia realiza una manifestación pacífica en la que denuncia la violencia del Golpe de Estado en Honduras. En la actividad, pintan un mural con mensajes de paz en la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, en el cantón de Montes de Oca, en la provincia de San José.

Martes 29

El Sindicato Costarricense de Trabajadores de la Educación (SEC) denuncia al MEP por no cancelar en su totalidad el pago del percentil 45, el cual es un mecanismo de revaloración salarial. De acuerdo al SEC, distintas denuncias fueron interpuestas por las y los educadores debido a que no recibieron dicho pago, que fue un acuerdo entre el MEP y el SEC.

Glosario de siglas

ANDA	Alianza Nacional para la Defensa del Agua.
ANDE	Asociación Nacional de Educadores.
ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
CANATRAC	Cámara Nacional de Transportistas.
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social.
CECOR	Conferencia Episcopal de Costa Rica.
CEDARENA	Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales.
CEJIL	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
CICR	Cámara de Industrias de Costa Rica.
CSJMP	Central Social Juanito Mora Porras.
EBAIS	Equipos Básicos de Atención Integral en Salud.
FA	Partido Frente Amplio.
FANCA	Red Centroamericana de Acción de Agua.
FIT	Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE.
FUNDEU	Fundación para el Desarrollo Urbano.
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad.
INS	Instituto Nacional de Seguros.
MEP	Ministerio de Educación Pública.
MINSa	Ministerio de Salud.

MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
MSJ	Municipalidad de San José.
MSP	Ministerio de Seguridad Pública.
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
PAC	Partido Acción Ciudadana.
PLN	Partido Liberación Nacional.
PRETOMA	Programa de Protección de Tortugas Marinas.
PROGRAI	Programa Institucional de Gestión Ambiental Integrada.
SEC	Sindicato de Educadores Costarricenses.
SINTRAJAP	Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica.
TSE	Tribunal Supremo de Elecciones.
UCCAEP	Unión Costarricense de Cámaras, Asociaciones y Empresas Privadas.
UCR	Universidad de Costa Rica.
UNDECA	Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social.
UTN	Universidad Técnica Nacional.

**Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Alejandro Alvarado Alcázar y Sindy Mora Solano.**

Fuentes: Diarios La Nación, Diario Extra, Semanario Universidad e Informa-Tico.com.